

ANÁLISIS DE LOS CONTEXTOS NACIONALES Y TERRITORIALES SOBRE PAZ TOTAL

Este texto tiene como objetivo señalar algunos avances significativos de la Paz Total en Colombia, junto con situaciones que detienen el proceso y el trabajo que Justapaz desarrolla en la apuesta por la transformación del conflicto desde las paces justas y dialogadas.

El país persiste en un conflicto armado que es el más longevo del mundo, ha alcanzado medio siglo de duración, es por eso la necesidad que se tiene como ciudadanos y la prioridad de este gobierno para encontrar alternativas y mecanismos pacíficos para salir del limbo en el que se encuentra “ni Paz ni guerra del todo, ni derrota militar del adversario, ni negociaciones de paz” (Hernández 2012, p.26).

La posibilidad de alcanzar la paz total en Colombia, se proyecta por medio de establecer diálogos con diversos grupos armados, partiendo de la certeza que estos procesos de negociación no son una competencia privativa de los estados y los actores armados, sino que, debe involucrar a terceros, a las distintas expresiones de la sociedad civil que incluyen escenarios locales regionales y albergan una significativa relevancia que refieren o asumen en sus intervenciones y prácticas de mediación desde un enfoque propio. La participación de las personas civiles u organizaciones en estos procesos desde su experiencia comunitaria local y otras nacionales que aportan distinta naturaleza, reconocen el conflicto desde sus matices y no se limita abordar diálogos únicamente desde la realidad de la violencia, porque esto sería un sesgo que genera escepticismo frente a las posibilidades de la paz e impide avanzar en la búsqueda de alternativas para asumir los retos que implican la construcción de paz.

Es necesario identificar las violencias de este país desde una nutrida mirada historiográfica de la violencia que contemple una estructura de tiempo de lo que pasó, de lo que está pasando y las posibilidades para el futuro. No es posible analizar este conflicto de manera lineal, desconociendo su complejidad, su carácter dinámico a lo largo del periodo de su duración y también las diversas maneras o voluntades que ha tenido tanto los grupos, como los gobiernos anteriores de hacer las paces.

Aunque hay mucha incertidumbre frente al proceso y garantías para la participación segura, los avances son evidentes, es una apuesta a la paz TOTAL y no fraccionada y fracturada como los anteriores intentos. Se debe reconocer que es un conflicto complejo, de carácter social y político prolongado, multipolar, degradado, dinámico y con actores que tienen la capacidad para adaptarse a los cambios políticos, territoriales y evidencian una realidad que no es posible desconocer o minimizar, estos actores y su accionar es latente independiente de sus momentos de crisis.

Así, el gobierno Nacional toma acciones para alcanzar la paz y reconciliación a través de diálogos con grupos como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), con el Estado Mayor Central y bandas criminales como el Clan del Golfo. De manera simultánea planea que

la apuesta de la Paz Total no sea la preocupación de un gobierno sino prioridad del Estado, por tal motivo se aprueba la Ley de Paz Total, la cual otorga al presidente la autoridad para entrar en un proceso de negociaciones y destinar presupuesto nacional para tal hecho.

La paz total, aborda el conflicto de manera integral en clave de construcción de paz superando su estigmatización, mirada puramente militar o política y reconociendo incluso la dimensión humana y de igualdad social, cultural y económica. Pero, actualmente tiene una amenaza ya que, pretende ser deslegitimada desde una ponencia presentada por un magistrado el mes de junio, intenta que la Corte Suprema de Justicia elimine la Ley 2272 del 2022 o la Ley Paz Total. Si se llega a tumbar, todos los diálogos y avances de negociación quedarían sin sustento jurídico, lo que retrasaría el proceso mientras el gobierno nacional toma nuevas acciones. No obstante, la premura de algunos opositores por ver resultados de los esfuerzos del gobierno en los territorios no se refleja, hay cuestionamientos frente a las decisiones políticas que se han tomado, surgen preguntas de si es posible alcanzar una "Paz Total" duradera. Un sentimiento compartido, lo hace la sobre expectativa del cambio, se quieren resultados inmediatos de un conflicto que como ya se mencionó es el más largo del mundo.

También, se cuestiona los protocolos de seguridad y las garantías de participación de las personas en los territorios; la disputa territorial entre los grupos armados, pues hay voluntad de negociar en diada grupo-gobierno, pero no entre estos, lo cual agudiza la violencia bélica, y las cifras de asesinatos incrementa. Se aclara, que el grupo donde hay más avances es con el ELN, pero estos no tienen presencia en todo el territorio nacional, lo que complejiza la situación, porque en unos territorios se avanza, mientras que en otros toman fuerza otros grupos armados con fines propios de control territorial. Pretendiendo profundizar, el cese al fuego con el ELN es un avance que no se habían logrado en ningún otro Gobierno. El máximo acercamiento fue durante el gobierno de Santos, donde se estableció una agenda con seis puntos a seguir. El Gobierno Petro recogió los puntos de esta agenda y es la primera vez que se firma cese al fuego con protocolos que se esperan sean funcionales y garantes de seguridad en el territorio. Este acuerdo pasará por diferentes etapas, que incluyen el alistamiento, preparación, implementación y verificación. La ejecución completa del acuerdo comenzará el 3 de agosto.

Por otra parte, se anunció públicamente los delegados del gobierno en las conversaciones que se van a adelantar con el EMC-FARC, con el fin de lograr la construcción de escenarios y acuerdos de justicia social y ambiental para dar por terminado el ejercicio de la violencia política que se expresa a través de este grupo armado. La muerte de Iván Márquez puede afectar el intento de diálogos con la Segunda Marquetalia.

Para terminar, el trabajo que Justapaz adelanta es el seguimiento juicioso en los territorios y desde diferentes escenarios de participación nacional, departamental o municipal, se participa o lidera trabajo con Mesas territoriales humanitarias, mínimos humanitarios, impulso a las agendas territoriales en el comité de participación, comunicación para informar lo que pasa en el comité de participación y espacios de plataformas de iglesias. El fortalecimiento de capacidades de los grupos, colectivos organizaciones o iglesias se hace desde un enfoque territorial respetando los intereses en particular de cada organización.

Una misionalidad del trabajo es acompañar y denunciar las situaciones por las que atraviesan las comunidades, los desplazamientos individuales o masivos, los paros armados y acciones para controlar el territorio. También, hay una rigurosidad frente a la información que se comparte en lo posible actualizada pero garante de verificación objetiva y con precaución para no hacer una acción con daño.

Se parte de la convicción que esta paz total negociada, es un proceso lento, se espera en estos meses haya más claridades frente a las estrategias que respondan a una participación real que contribuya a la construcción de democracia desde las regiones; garantías para una participación segura, eficaz y pluralista, rutas para que la participación sea realmente vinculante y recomendaciones para el trabajo de incidencia desde las iglesias.

GARANTÍAS PARA UNA PARTICIPACIÓN, SEGURA, EFICAZ Y PLURALISTA.

El pasado 9 de junio del 2023, se dio a conocer un mecanismo para la participación de la sociedad civil en la agenda del posible acuerdo entre Gobierno y ELN, este comité está integrado por 30 organizaciones de las cuales se desprenden 86 personas y se instala el 25 de julio, cada una de estas organizaciones con su propio enfoque y población objeto tendrá durante tres meses la tarea de movilizar los territorios para la construcción de metodologías para la participación.

Para ello se espera que se puedan hacer encuentros con los que se tengan insumos que una vez sistematizados hacia el mes de febrero del 2024 se tenga un documento que dé cuenta de metodologías que le permita: un diagnóstico y diálogo sobre democracia para la paz, construcción de agenda sobre democracia y transformaciones, y una sistematización de los resultados con un objetivo central de la participación de la sociedad para la realización de una agenda de transformaciones para la paz que quede en el Gran Acuerdo Nacional.

En este nuevo panorama, los territorios asociados al proyecto ISP, Bajo Cauca, Eje Cafetero, Chocó, y Cali destacan la importancia de este esfuerzo del Gobierno Nacional, sin embargo, consideran que la viabilidad de la participación de la sociedad es un reto cuando siguen existiendo acciones en contravía del cese a fuego bilateral, el paro armado actual en el departamento de Chocó, el orden público generado por la rivalidad entre los grupos armados que sigue poniendo en riesgo a la población civil y a los líderes y lideresas sociales en el Bajo Cauca.

De otra parte, en las ciudades si bien el enfrentamiento a causa del conflicto armado interno no ocurre directamente, para este primer semestre del año, en el departamento del Cauca se han presentado fuertes cruces entre los diferentes grupos ilegales que se disputan municipios del departamento, de acuerdo a medios locales, entre el 18 de febrero y el 17 de marzo las confrontaciones armadas pasaron de 16 a 32 según el Boletín de Monitoreo del Cese al Fuego de la Defensoría del Pueblo donde se ven involucrados 4 grupos armados ilegales que hacen parte del decreto que habría expedido el Gobierno Nacional y afectaron además del departamento del Cauca, al Valle de Cauca, Huila, Nariño, y Antioquia.

Hechos que generan desplazamientos internos, afectaciones en el sistema educativo como en el municipio de Argelia, Cauca donde más de 4000 niñas y niños han tenido que ver interrumpido su periodo escolar porque el recrudecimiento del conflicto ha obligado a la planta docente a dejar el territorio. Es por esto que la niñez y el impacto que recae sobre ella a causa del conflicto armado interno tiene que convertirse en un tema prioritario en la agenda de este Gran Acuerdo Nacional.

De acuerdo con el “Informe anual sobre niñez y conflictos armados” del año 2022, los grupos armados cometieron aproximadamente 290 violaciones contra NNJA, en comparación con el año 2021, hubo un aumento del 25%, y la preocupación es inminente porque con cada NNJA impactado hay un efecto sobre las relaciones de familia, amistades, docentes, y comunidades que sufren las consecuencias de este flagelo, agregando nuevas heridas a los ciclos generacionales que ha ocupado la guerra interna en el país limitando la garantía de derechos y continuar aumentando los ciclos de pobreza y exclusión, factores que impiden la participación de las comunidades frente a los diálogos que se vienen gestando para el logro de la Paz Total.

De manera similar, se suma que Cali es una ciudad receptora de la población víctima del conflicto, y eso impone retos institucionales para la atención de esta población y garantizar derechos como: agua potable, seguridad, salud, educación, integración, entre otros. Por tanto, urge tener en cuenta que existen dificultades en las instituciones y organizaciones humanitarias ante el desbordamiento de las necesidades de esta población y el recrudecimiento también en Buenaventura donde iniciando el semestre más de 2000 personas provenientes del Bajo Calima, y la zona rural de Buenaventura llegaron a la ciudad en busca de respaldo del gobierno local. En ese sentido, lo que se viene presentando en los territorios donde el proyecto de ISP tiene margen de acción, es un recrudecimiento de la violencia que exige retos para la participación, y es que desde las organizaciones locales se movilice a la ciudadanía no organizada que ve en estos hechos un sentir de desesperanza, incluso de desconfianza porque como se mencionó anteriormente, pese a la expedición del decreto del cese al fuego, los enfrentamientos siguen ocurriendo, el asesinato de firmantes de paz y líderes y lideresas sociales continúa en aumento, y frente a esto, no hay respuestas.

Finalmente, lo que se viene exigiendo desde las organizaciones sociales es que se avance en la implementación del Acuerdo de Paz sin abandonar el nuevo panorama de negociación con el ELN, y es que la ruta de la implementación está dada por la garantía de: los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET, el Programa Nacional de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), y la seguridad de firmantes de paz y líderes y lideresas sociales.

Rutas para que la participación sea realmente vinculante

Como se menciona en el apartado anterior, es necesario que se siga fortaleciendo los mecanismos para la implementación de los Acuerdos de Paz, y en ese sentido, será importante continuar en los espacios donde ya se tiene incidencia territorial. De otra parte, la mesa de negociación entre el ELN y el Gobierno Nacional después de siete meses de encuentros

propone un mecanismo como es el Comité Nacional de Participación - CNP para que la sociedad civil participe de este nuevo proceso de paz.

En ese orden de ideas, para los territorios será clave continuar interviniendo en espacios como los Consejos Municipales de Paz, plataformas multiactor, Mesas de Víctimas, Programas de Desarrollo y Paz, mesas humanitarias de mínimos humanitarios, entre otros. De manera que se pueda articular trabajo con las organizaciones que hacen parte del CNP como, por ejemplo, Redepaz, la Coordinadora Nacional Humanitaria, y Dipaz, organizaciones con las cuales Justapaz tiene incidencia.

Junto a esto, es importante que la Gestoría de Paz del ELN promueva con estas organizaciones la difusión de la información que hasta el momento está construída, esto con el fin de poder hacer pedagogía al respecto de los primeros insumos que se tienen luego de siete meses de encuentros entre las partes. En ese orden de ideas, poder incluso hacer uso de los medios masivos de comunicación y/o el Sistema de Medios Públicos para la creación de pautas pedagógicas que promuevan el diálogo social, la importancia del CNP, y por supuesto la política de Paz Total.

Como el esquema general del acuerdo en la fase de participación tiene en cuenta un segundo momento que es la fase de diagnóstico y diálogo sobre la democracia para la paz, donde se tendrá en cuenta informes estatales, investigaciones por parte de la academia, estudios sociales, es necesario que desde Justapaz se promueva también las investigaciones realizadas a través de estos más de 30 años con las comunidades y así fortalecer el desarrollo de dicha democratización de la paz.

Así mismo, desde los territorios se requiere el acompañamiento a espacios que servirían de antesala a la realización de los 8 encuentros territoriales que se prevé y que aunque se desconoce dónde se llevarán a cabo, es menester que haya algunos encuentros preparatorios entre organizaciones y sociedad civil para el diálogo en términos de pedagogía para la paz e identificar cómo las organizaciones se vienen pensando esta nueva paz, incluso si se sienten o no representados por quienes hacen parte del CNP y de no ser así el cómo poder articularse, trabajar de manera colectiva puede brindar más seguridad en aras de promover la participación.

En conclusión, mientras se surten las fases de participación, es indispensable que se trabaje de manera paralela en otro de los puntos que hace parte de este esquema general del acuerdo, y es el denominado “pedagogía y comunicación del proceso de participación” con el fin de poder ir promoviendo piezas a través de las redes, elementos audiovisuales, incluso programas de radio que sirvan para la dinamización de espacios de encuentro entre las organizaciones, academia, iglesias, y sociedad en general donde se motive la importancia de un nuevo Acuerdo de Paz.

Recomendaciones para el trabajo de incidencia desde las iglesias

El propósito de la paz es uno de los derroteros que tiene el área de ISP, y en ese sentir, desde los territorios se considera que el trabajo con las iglesias luego de la experiencia del plebiscito es preciso empezar a tener:

1. Foros, talleres o actividades donde se realicen ejercicios pedagógicos de la importancia de la participación, pero también del impacto que tendrá este nuevo Acuerdo de Paz desmitificando hitos que se impusieron en el último Acuerdo de Paz firmado en el 2016.
2. Seguir acompañando a las mesas o consejos de participación que ya están, proponiendo temas de paz o negociación, y la política de Paz Total.
3. Hacer uso de las redes sociales y emisoras para difundir la información que ya está y /o que se vaya produciendo según avancen las fases de participación que pretende el CNP.
4. Realizar talleres preparatorios o pedagógicos sobre los temas de paz desde las vocerías de los y las pastores o miembros de la iglesia.
5. La realización de jornadas culturales, artísticas que involucren a la comunidad, y el organismo levadura que aborden los temas de paz.
6. Aunar esfuerzos para que tanto los medios de comunicación masiva, como los medios públicos puedan disponer de pautas televisivas que motiven la participación y movilicen la ciudadanía para respaldar la nueva agenda de diálogos de paz.

De otra parte, cabe anotar que para la ciudad de Cali, se debe tener en cuenta que las iglesias vienen haciendo un trabajo gradual en realizar acciones de incidencia que involucren temas de ciudadanía activa, puesto que en la ciudad los y las líderes de iglesia tienen un ritmo de trabajo dentro y fuera de la iglesia que por momentos dificulta su participación en espacios varios que se van imponiendo en la ciudad para movilizar el tema, sin embargo, sí se encuentra recepción para poder abordar algunos temas al respecto de, en las reuniones de seguimiento a la iniciativa de paz local, y también en espacios nacionales promovidos desde Justapaz.

En Chocó se puede avanzar gracias al trabajo que se hace de monitoreo con las iglesias de Condoto y la plataforma Ciederpaz.

Para el eje cafetero, además de lo anterior, se propone tener mayor visibilidad al proceso teniendo en cuenta que hay zonas que se encuentran totalmente ajenas a este tema y por tanto, se debe hacer un trabajo de pedagogía que pueda contrarrestar la experiencia del plebiscito y se cree que pueda realizarse a través de los Consejos de Paz e iglesias.

Finalmente, para el Bajo Cauca se propone la articulación con el PRP para estos temas pues es una plataforma multiactor y desde allí poder hacer parte de las veedurías, así mismo, continuar con la participación en la Mesa Humanitaria de Antioquia.